



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO

Medellín, diez de noviembre de dos mil veintitrés

23-241

Proceso:	ORDINARIO LABORAL- apelación.
Demandante:	ENRIQUE PRIETO DIAGO.
Demandado:	COLPENSIONES E.I.C.E, y otros.
Llamada en garantía:	MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.
Radicado No.:	05001-31-05-018-2020-00224-01.
Tema:	ineficacia traslado
Decisión:	CONFIRMA Y MODIFICA SENTENCIA.

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrados **MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA, MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por Porvenir S.A., Skandia S.A. y Colpensiones E.I.C.E., contra la sentencia de primera instancia emitida en el proceso de la referencia.

El Magistrado de conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 038** de discusión, que se adopta como sentencia, en los siguientes términos:

1. SÍNTESIS FÁCTICA y ANTECEDENTES

1.1. LO PRETENDIDO

Solicitó el demandante, se declare la **INEFICACIA** del traslado al RAIS, considerando sin solución de continuidad la afiliación al RPM. Que se condene a Skandia S.A. a trasladar el saldo de la cuenta de ahorro individual a Colpensiones, sin descuento por administración. Que se ordene a Protección S.A. y Porvenir S.A. como sucesoras de Santander y Horizonte, reintegrar los descuentos realizados. Que se condene Colpensiones a recibir las cotizaciones y actualizar la historia laboral del actor. Finalmente solicitó que se impongan costas a los fondos privados.

1.2. PARA FUNDAMENTAR SUS PRETENSIONES, EXPUSO LOS SIGUIENTES HECHOS:

- ✓ Que nació el 31 de diciembre de 1963.
- ✓ Que se afilió inicialmente al ISS el 1 de junio de 1994, teniendo como empleador a la ESE Hospital Santa Clara.
- ✓ Que el 14 de junio de 2006 se trasladó al RAIS administrado por Santander.
- ✓ Que el asesor del fondo privado le indicó que le convenía efectuar el traslado ya que el ISS iba a ser liquidado, aunado a que podría pensionarse a menor edad y en mejores condiciones.
- ✓ Que la AFP no brindó información clara y comprensible sobre las características y diferencias de los regímenes pensionales, así como de las consecuencias que acerraría el traslado de régimen.
- ✓ Que en septiembre de 2007 efectuó movilidad a Horizonte, y posteriormente en 2016 a Old Mutual, sin que dichas entidades suministraran ningún tipo de información adicional.
- ✓ Que no fue asesorado antes de cumplir los 52 de edad.

1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Colpensiones E.I.C.E., se opuso a la prosperidad de las pretensiones; y frente a los hechos estimó como ciertos los relativos a la afiliación efectuada al ISS, y la movilidad formalizada ante Old Mutual. Frente a los demás supuestos facticos, indicó que no le constan considerando que son exógenos al conocimiento de la entidad.

Skandia S.A. se opuso a la totalidad de pretensiones; y frente a los hechos, aceptó el relativo a la fecha de nacimiento del demandante. Frente a los demás hechos adujo que no le constan por relacionar a otras AFP. Respecto de la afiliación a este fondo, destacó que al actor se le entregó toda la información a la que había lugar, y que el fondo tiene a disposición de sus afiliados diferentes canales informativos, por lo que no es aceptable ningún reproche por la gestión de esta entidad.

Porvenir S.A. se opuso a la totalidad de pretensiones; y no aceptó ningún hecho plasmado en el libelo demandatorio. Frente al traslado de régimen pensional adujo que, los asesores de esta AFP suministran una información oportuna, clara, suficiente, concreta, adecuada y veraz, conforme a las obligaciones legales vigentes, siendo finalmente el afiliado quien elige vincularse de forma libre, voluntaria e informada.

Por su parte, Protección S.A. se opuso a las pretensiones de la demanda; y frente a los hechos, únicamente aceptó el relativo al traslado de régimen pensional, respecto del cual manifestó que la parte actora fue informada de manera objetiva e integral sobre todas las características del RAIS en comparación con el RPM, además de las particularidades y funcionamiento de dicho régimen.

Finalmente, la entidad llamada en garantía MAPFRE S.A. se opuso a las pretensiones incoadas; y frente a los hechos manifestó que no le constan, resaltando que se trata de actuaciones ajenas a la entidad llamada en garantía, además de que lo narrado se encuentra al margen de la póliza previsional por la que se vinculó a la aseguradora.

1.4 DECISIÓN PRIMERA INSTANCIA.

Mediante sentencia proferida el 8 de agosto de 2023, el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín dispuso lo siguiente:

“PRIMERO: DECLARAR la ineficacia de la afiliación de los señores ENRIQUE PRIETO DIAGO y LEONOR LEON VELASCO, radicados 2020-00224 y 2020-00346 al régimen de ahorro individual con solidaridad administrado por la ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A.

Así mismo, se declara la ineficacia de afiliación del señor JOSE ALFREDO JIMENEZ ARRIETA, proceso terminado en 2020-00308, al régimen de ahorro individual con solidaridad administrado por COLFONDOS PENSIONES Y CESANTIAS y por ende la movilidad entre administradoras conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la AFP SKANDIA S.A, en el caso de los señores ENRIQUE PRIETO DIAGO y LEONOR LEON VELASCO y a PORVENIR S.A. en el caso del señor JOSE ALFREDO JIMENEZ ARRIETA a efectuar el traslado inmediato de todos los valores que hubiere recibido con motivo de las afiliaciones de éstos, tales como cotizaciones, con los rendimientos que se hubieren causado, las cuotas de administración debidamente indexadas, primas de reaseguros de Fogafín y las primas de los seguros de invalidez y sobreviviente, porcentajes destinados al fondo de garantía de pensión mínima con cargos a sus propios recursos y por el tiempo en que los demandantes realizaron aportes en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, según se explicó en las consideraciones de la presente providencia.

En igual sentido, ORDENAR a la AFP PROTECCION S.A. y PORVENIR S.A. en el caso del señor ENRIQUE PRIETO DIAGO, radicado 2020-00224; COLFONDOS Y PROTECCION en el caso del señor JOSE ALFREDO JIMENEZ ARRIETA radicado 2020-00308; y en el radicado 2020-00346 en el caso de la señora LEONOR LEON VELASCO ordenar a PROTECCION y PORVENIR trasladar a COLPENSIONES-EICE los porcentajes correspondientes a los gastos de administración y primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, y el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima, debidamente indexados y con cargo a sus propios recursos, durante el tiempo en que los demandantes estuvieron afiliados a cada administradora.

Al momento de cumplirse esta orden, deberán las administradoras certificar los conceptos discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

TERCERO: ORDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, reactivar la afiliación de los demandantes ya identificados, recibir las sumas indicadas y continuar como su administradora de pensiones, según se dijo en la parte motiva.

CUARTO: Se ABSUELVE a MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. de todas y cada una de las pretensiones formuladas en su contra por SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A., conforme se explicó en las motivaciones.

QUINTO: DECLARAR INFUNDADA la excepción de prescripción, las demás quedan implícitamente resueltas como meras oposiciones.

SEXTO: CONDENAR en COSTAS en esta instancia y a favor de los demandantes y a cargo de cada una de las administradoras en las que estuvieron afiliados estos; y también se condena a SKANDIA S.A. a favor de MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. en los procesos radicados 2020-00 y 2020-00346, para cuya liquidación se incluirán como Agencias en Derecho el equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, para el momento de la liquidación. Sin costas para COLPENSIONES.

SEPTIMO: Sea o no apelada esta providencia se ordena remitir el presente proceso para que se surta el grado jurisdiccional de consulta ante el tribunal superior sala laboral conforme lo estipula el artículo 69 del CPTYSS.”

Dentro del término concedido por la ley, Porvenir S.A., Skandia S.A. y Colpensiones E.I.C.E. interpusieron recurso de apelación.

2. ARGUMENTOS

2.1. DE LA JUEZ PARA DECIDIR

La decisión se motivó en el incumplimiento del deber de información por parte de las administradoras del RAIS, en quienes recaía la carga de acreditar la existencia de una asesoría clara, completa y veraz, lo que no ocurrió, sujetándose para el efecto en las sub-reglas sentadas en la línea jurisprudencial de la Sala de Casación Laboral.

2.2. RECURSOS DE APELACIÓN.

2.2.1 PRESENTADO POR PORVENIR S.A.

Solicitó se revoque la providencia de primera instancia, considerando que la afiliación del actor fue válida, y estuvo precedida de una asesoría clara e integral, siendo insuficientes los presupuestos para declarar la ineficacia pues el demandante durante más de 20 años contó con todas las posibilidades de conocer las características del régimen al cual permanecía. Resaltó que no es procedente exigir el cumplimiento de obligaciones que surgieron con posterioridad al traslado pues se desconoce el principio de irretroactividad jurídica. Destacó que la única motivación del demandante para solicitar el traslado es el monto de la mesada pensional, parámetro que no podía ser determinado al momento de la afiliación.

Respecto al retorno de los gastos de administración, solicitó se revoque dicha condena teniendo en cuenta que estas sumas fueron invertidas como lo exige la Ley, y se dio cobertura a los riesgos de invalidez y muerte, por lo que debe tenerse en cuenta lo dicho por la Superintendencia Financiera de Colombia, debiéndose respetar todo lo atinente a las restituciones mutuas, situación que no sucedió en el fallo recurrido. Respecto a la devolución de los rendimientos financieros, destacó que no pueden aplicarse los efectos de la ineficacia de forma parcial, pues este concepto también debe considerarse inexistente. Frente a la indexación, resaltó que si lo que se busca es preservar la pérdida adquisitiva de la moneda, esto se resarciría con el traslado de los rendimientos financieros.

Frente a las costas del proceso, solicitó se exonere a la entidad de dicha condena teniendo en cuenta que no fue el fondo quien ocasionó el traslado de régimen pensional.

2.2.2 PRESENTADO POR SKANDIA S.A.

Solicitó que se revoquen las condenas en su contra, teniendo en cuenta que el traslado se dio conforme a los parámetros fijados para la época, siendo el formulario de afiliación el único soporte escritural que debía dejarse de la decisión libre y voluntaria del demandante, pues no era una obligación vigente guardar otros documentos que acrediten la entrega de información, ya que esta directriz nació en el año 2016, con la expedición de la Circular 016 de la Superintendencia Financiera de Colombia, por lo anterior, el cumplimiento de dicha obligación no puede exigirse de forma retroactiva. Destacó que la movilidad efectuada a las distintas administradoras del RAIS ratifica la decisión de permanecer en este régimen pensional, pues fueron diversos momentos en que el actor recibió información acerca del RAIS, y aun así decidió permanecer en este régimen pensional.

De otro lado, solicitó se revoque la orden de trasladar los gastos de administración pues la AFP ha generado buenos rendimientos, superando los que hubiese podido generar en Colpensiones, lo anterior, conforme a lo indicado por la Superintendencia Financiera de Colombia en radicado 2019152169003 de 2020, en donde se hace inferencia a la importancia de respetar las restituciones

mutuas a que haya lugar. Frente a la devolución de las primas de seguro previsional, solicitó se revoque su traslado y que se tenga en cuenta para todos los efectos a la llamada en garantía pues fue la entidad que recibió esos dineros, mismos que cumplieron su propósito, esto es, generar la cobertura correspondiente.

Frente a las costas procesales, resaltó que esa entidad ha obrado de buena fe y conforme a la normatividad vigente, aclarando además que no fue la responsable del traslado de régimen pensional

2.2.3 PRESENTADO POR COLPENSIONES E.I.C.E.

Solicitó se revoque la providencia, específicamente en lo atiente a la orden dada a dicha entidad de recibir los aportes del demandante, lo anterior, considerando que dicha obligación viola el principio de solidaridad ya que el demandante por más de 20 años ha efectuado cotizaciones a otras entidades y no al fondo común. De otro lado, consideró que los traslados efectuados por el demandante fueron realizados con consciencia y claridad, por lo que dicha orden vulnera el patrimonio de los demás afiliados que permanecieron en el RPM.

2.3 ALEGATOS DE CONCLUSIÓN.

2.3.1 PRESENTADOS POR PORVENIR S.A.

En primer lugar, resaltó que no existían razones fácticas y jurídicas para declarar la ineficacia del traslado, pues la decisión se tomó de forma espontánea y sin presiones, cumpliendo los requisitos exigidos por la normatividad vigente (artículo 97 del Decreto 663 de 1993), y después de brindar la información necesaria, y obligatoria para la época. Destacó que el accionante no cumplió su deber de diligencia y cuidado en sus propios negocios, lo cual conlleva a que la misma no pueda ser beneficiaria de su propia culpa o negligencia en su actuar, más aún, cuando contó con varias oportunidades para trasladarse nuevamente de régimen y no lo hizo, ratificando su interés en mantenerse vinculada al RAIS.

Adujo que la motivación de la parte actora para retornar al RPM, es el carácter económico de la mesada pensional, mismo que no podía ser determinado en el momento en el que se presentó su vinculación, al depender de muchas variables que no eran conocidas en su momento, razón por la cual, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia determinó que la sola circunstancia de no cumplirse las expectativas pensionales no puede predicarse como un engaño.

Destacó que la prueba documental que extraña la juez de primera instancia en su fallo, frente a aquellos documentos que acrediten la entrega de información, no era una obligación vigente para el

momento del traslado de la parte actora, pues esta obligación surgió con la Circular 016 de 2016 de la Superintendencia financiera de Colombia, aunado a que la obligación del buen consejo, la doble asesoría, e incluso la de desincentivar la afiliación surgieron a partir del año 2010 y 2014, por lo que no es cierto que la AFP se encuentra en una mejor posición probatoria que acredite lo solicitado, y mucho menos debe exigirse su aplicación de manera retroactiva.

En caso de confirmarse la decisión de primera instancia, solicitó que no se condene al traslado de los aportes destinados al fondo de garantía de pensión mínima, gastos o cuotas de administración y sumas adicionales de la aseguradora y reaseguradora, considerando que los gastos de administración tienen por mandato legal una destinación específica que se encuentra en el artículo 20 de la ley 100 de 1993, aunado a que estos descuentos han cumplido plenamente con su cometido y no se encuentran en el patrimonio de la AFP, pues se han destinado a cubrir los gastos en que se incurrió, para la generación de frutos o rendimientos que hoy se ven de manera positiva en la cuenta del accionante y para el cubrimiento de los riesgos de invalidez y muerte. Destacó que la orden de traslado constituye un enriquecimiento sin causa debido a la inaplicación de las normas legales que regulan las restituciones mutuas derivadas de una nulidad o ineficacia de un acto jurídico, además de transgredir el principio de sostenibilidad financiera. Aunado a lo anterior, destacó que no es procedente ordenar la indexación de las condenas, pues la pérdida adquisitiva de la moneda se resarciría con los rendimientos financieros generados.

Finalmente, con relación a las costas procesales, indicó que no es procedente por cuanto la entidad siempre obró con buena fe objetiva, y en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes para la época del traslado.

2.3.2 PRESENTADOS POR SKANDIA S.A.

Destacó que, la entidad cumplió a cabalidad con el deber de información, pues la afiliación que realizó de manera libre, voluntaria y consciente tal como quedó expresado en el formulario de afiliación, cuya forma pre impresa se encuentra ajustada a los requisitos establecidos en el artículo 11 del decreto 692 de 1994, siendo dicho documento prueba suficiente de la libertad de la afiliación de la accionante al RAIS.

Frente al llamamiento en garantía, indicó que al retrotraer los efectos de la afiliación al RAIS, el contrato de Seguro Previsional también sería parcialmente ineficaz a la luz del artículo 1137 del Código de Comercio y, en consecuencia, la entidad aseguradora estaría obligada a devolver las primas pagadas por la entidad respecto del demandante.

3 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO EN ESTA INSTANCIA

De acuerdo con lo planteado en los recursos de alzada, se establecerá si es dable declarar la ineficacia de la afiliación del demandante a la sociedad administradora de fondo de pensiones a través de la cual se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad, analizando lo atinente a la aplicabilidad de lo que en torno al tema ha dispuesto la Corte Suprema de Justicia. En caso afirmativo se determinará qué haberes le corresponde retornar a PORVENIR S.A., PROTECCIÓN S.A. y SKANDIA S.A.

Así mismo, conforme lo señalado por nuestro órgano de cierre, se examinará en grado jurisdiccional de consulta aquellos aspectos que pese a ser adversos Colpensiones, no fueron objeto del recurso de apelación, al ser el Estado garante dicha entidad conforme lo normado en el art. 69 del CPT y la SS, disposición en virtud de la cual se faculta a este órgano a adicionar, aclarar y/o modificar la providencia en los ítems que resulten necesarios.

4 CONSIDERACIONES

A juicio de esta Magistratura, el corpus argumentativo que ha construido la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia para este asunto de la ineficacia de los traslados, se ha ido ampliando con el paso de los años. Es así como en la sentencia con radicado 31.989 de 2008, reiterada en las sentencias de radicación 31.314 del 09 de septiembre de 2008 y 33.083 del 22 de noviembre de 2011, la Corte abordó el estudio del asunto bajo el enfoque de la nulidad del acto, acontecida como consecuencia de un vicio en el consentimiento al suscribir los formularios de afiliación con los cuales se materializaba su traslado al RAIS, señalando que dicho consentimiento se afectó determinadamente por el engaño al que fueron sometidos por parte de los asesores de los Fondos de Pensiones demandados y que los llevó a tomar una decisión que iba contra sus intereses.

Posición que mudó posteriormente, para adscribirse a lo que ha denominado la ineficacia, cuando adujo que *solo a través de la demostración de la existencia de la libertad informada para el cambio de régimen, es que el juzgador podría avalar su transición; no se trata de demostrar razones para verificar sobre la anulación por distintas causas fácticas, sino de **determinar si hubo eficacia en el traslado.*** (Sentencia con radicado 46.292 de 2014).

Desde un comienzo, la tesis de la ineficacia se ha apoyado en dos disposiciones normativas contenidas en la Ley 100 de 1993: el literal b) del artículo 13, que señala el carácter libre y voluntario de la elección del respectivo régimen y las posibles sanciones para quien atente contra ese derecho;

y el artículo 271, donde se establecen las respectivas sanciones para quienes coarten esa libre selección al afiliarse y se indica que la misma quedará sin efecto.

Al desecharse la vía de la nulidad, ya NO es preciso acudir a lo normado en el art. 1750 del Código Civil, que contempla el plazo de cuatro años para interponer la acción de rescisión por nulidad relativa, ni tampoco resultó posible que con la re-asesoría que los Fondos privados brindaban en muchas ocasiones, se pudiera convalidar ese traslado original.

Por las consecuencias que la Sala Laboral ha derivado de la ineficacia de los traslados al RAIS, resulta claro que ha optado por la ineficacia por inexistencia del acto jurídico, en este caso, por la ausencia total de consentimiento al momento de la afiliación o del traslado, siendo ese consentimiento un elemento de la esencia del negocio.

Punto en que la jurisprudencia del trabajo se ha explayado en razones para explicar cómo en los casos donde ha prosperado la declaratoria de la ineficacia, se ha estado en ausencia de un **consentimiento informado**, entendido como *un procedimiento que garantiza, antes que aceptar un ofrecimiento o un servicio, la comprensión por el usuario de las condiciones, riesgos y consecuencias de su afiliación al régimen. Vale decir, que el afiliado antes de dar su consentimiento, ha recibido información clara, cierta, comprensible y oportuna.* (Sentencia con radicado 68838 de mayo de 2019). Lo cual en ningún caso puede subsanarse con la firma en señal de aceptación en un formato previamente determinado por la AFP.

Ese deber de información ha estado presente desde la creación del Sistema de Seguridad Social Integral en Colombia. E incluso desde antes. En efecto, el Decreto 663 de 1993, «Estatuto Orgánico del Sistema Financiero», aplicable a las AFP desde su creación, prescribió en el numeral 1° del artículo 97, la obligación de las entidades de «suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado».

La propia Corte, en la sentencia 68.838, multireferenciada, elabora un cuadro que intenta mostrar la evolución normativa en la materia. Así:

Etapas acumulativas	Normas que obligan a las administradoras de pensiones a dar información	Contenido mínimo y alcance del deber de información
Deber de información ETAPA EN LA QUE SE	Arts. 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993 Art. 97, numeral 1.º del Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 797 de 2003	Ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia

ENCONTRABA EL DEMANDANTE	Disposiciones constitucionales relativas al derecho a la información, no menoscabo de derechos laborales y autonomía personal	de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales
Deber de información, asesoría y buen consejo	Artículo 3.°, literal c) de la Ley 1328 de 2009 Decreto 2241 de 2010	Implica el análisis previo, calificado y global de los antecedentes del afiliado y los pormenores de los regímenes pensionales, a fin de que el asesor o promotor pueda emitir un consejo, sugerencia o recomendación al afiliado acerca de lo que más le conviene y, por tanto, lo que podría perjudicarle
Deber de información, asesoría, buen consejo y doble asesoría.	Ley 1748 de 2014 Artículo 3.° del Decreto 2071 de 2015 Circular Externa n.° 016 de 2016	Junto con lo anterior, lleva inmerso el derecho a obtener asesoría de los representantes de ambos regímenes pensionales.

Se exige entonces una índole de consentimiento tan específico por parte de un afiliado, que una mínima variación en el proceso de asesoría comporta la declaración de que hubo ausencia total de consentimiento y, por lo mismo, ineficacia por inexistencia del acto jurídico.

Pero, además, al invertirse la carga de la prueba, le basta al actor afirmar que no obtuvo la información adecuada cuando transitó entre los regímenes, para que sea el fondo de pensiones el que deba desplegar la actividad probatoria necesaria para demostrar ese cabal acompañamiento. En tal sentido, se insiste, ni el paso del tiempo impide accionar contra un acto que no existió ni la oportuna re-asesoría, cuando ella se presenta, puede sanear lo que feneció al nacer.

Un párrafo de la pluricitada sentencia 68.838 de 2019 es elocuente:

De hecho, la regla jurisprudencial identificable en las sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL 31314, 9 sep. 2008 y CSJ SL 33083, 22 nov. 2011, así como en las proferidas a la fecha CSJ SL12136-2014, CSJ SL19447-2017, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018 y SL1452-2019, es que las administradoras de fondos de pensiones deben suministrar al afiliado información clara, cierta, comprensible y oportuna de las características, condiciones, beneficios, diferencias, riesgos y consecuencias del cambio de régimen pensional y, además, que en estos procesos opera una inversión de la carga de la prueba en favor del afiliado.

La mirada censora de la Corte sobre estos procedimientos de las AFP se ha ido ampliando, desde los afiliados que tenían el beneficio de transición o estaban próximos a pensionarse, hasta toda clase de afiliados. Este último fallo lo reafirma:

Lo anterior, se repite, sin importar si se tiene o no un derecho consolidado, se tiene o no un beneficio transicional, o si está próximo o no a pensionarse, dado que la violación del deber de información se predica frente a la validez del acto jurídico de traslado, considerado en sí mismo.

Así las cosas, teniendo en cuenta el recuento realizado, se desprende, de un lado, que para la época del traslado inicial al RAIS, concretamente el 14 de junio de 2006, fecha en la cual suscribió el

formulario de afiliación a Horizonte hoy Protección S.A. (fl 40 del archivo 21 del expediente digital), existía la normatividad ya citada que aludía la existencia de un **deber de información**, y de otro lado, que escaso era el conocimiento que tenía el actor respecto del funcionamiento de ambos regímenes, estando el traslado en su momento motivado la extinción del ISS, panorama bajo el cual, más que promocionarse el RAIS como una alternativa, era prácticamente una imposición ante el temor que fundaba tal aseveración, y por la ausencia de una asesoría integral en donde se le indique las características del RAIS, las ventajas y desventajas que acarrearía el traslado de régimen pensional.

Y es que expresamente el señor ENRIQUE PRIETO DIAGO, en el aludido interrogatorio expuso que su grado de escolaridad es profesional en medicina. Respecto al traslado a Santander, adujo que encontrándose en su lugar de trabajo, mediante una charla de 10 minutos le indicaron que el ISS se iba a terminar, por lo que tenía que escoger un fondo de pensiones diferente, sin que medie ningún tipo de asesoramiento sobre las desventajas del traslado. Resaltó que le presentaron dos ventajas, la primera que se podía pensionar a menor edad, y la segunda que debido a la terminación del ISS, le convenía estar en un fondo donde los rendimientos serían superiores. Resaltó que nunca tuvo claro que la disminución en el monto de ingresos iba a ser tan drástica.

Respecto a la movilidad efectuada a Horizonte, destacó que se dio con base a un cambio de trabajo, y que consideraba que el cambio de fondo privado debía hacerse como un requisito de vinculación en la nueva empresa. Destacó que todos los compañeros se trasladaban, sin que medie algún tipo de asesoría. Aclaró que no recibió reasesoría pensional.

Respecto a la afiliación a Skandia, indicó que se dio con base a que fue el fondo que le brindó un mayor acompañamiento, ya que sostenía otro tipo de negocios antes de su vinculación.

Destáquese que el deponente NO aceptó tener una formación en seguridad social de la que pudiese predicarse una comprensión del tema, máxime cuando ni siquiera se acreditó la existencia de una explicación completa por parte del asesor.

En todo caso, en gracia de discusión, lo cierto es que no se vislumbra una suficiente ilustración, ni siquiera en asuntos tan relevantes como aportes voluntarios, pese a la trascendencia de este aspecto en la obtención de una pensión en un monto mayor en contraste con la que percibiría del régimen de prima media, máxime si este es uno de los atractivos con los que más se publicita este sistema; tampoco se le habló de modalidades de pensión, la posibilidad de acceder a una garantía de pensión mínima, los requisitos para causar la prestación por vejez en uno y otro régimen, las principales diferencias de cada uno, lo atinente a la redención del bono pensional y ello sólo por mencionar

algunos aspectos que debieron ser abordados en esa reunión inicial. Pero nada de ello se dijo, o por lo menos no se acreditó.

Tampoco existían las herramientas financieras o la tecnología para realizar algún tipo de cálculo, de ahí que esta Sala cuestione la dificultad para establecer, en aquella época, cuál régimen le era más favorable a una persona, pues realmente el monto de la pensión es uno de los aspectos que tiende a inclinar la balanza a la hora de la escogencia de un fondo, prestación en un principio depende de un capital mínimo exigido, punto que NO ERA clarificado en forma suficiente para efectos de que una persona entendiera que de NO alcanzar el ahorro necesario NO se pensionaría, o por lo menos que la prestación dependía del capital acumulado en toda la vida laboral, aunado a la incidencia de factores externos impredecibles a futuro (composición del grupo familiar, fluctuación de los IBC y variación del mercado, etc) haciéndole un estimativo de cuánto dinero se requería sólo para financiar un salario mínimo, panorama bajo el cual entendería la necesidad de planear su futuro pensional para acceder a una cuantía mayor, pero tal aspecto también se omitió, o por lo menos, se insiste, no se acreditó lo contrario.

Empero, lo antes expuesto no debe comportar un foco de distracción, pues era a la administradora del RAIS y no a la parte actora, a la que le correspondía probar, como se indicó, que con antelación al diligenciamiento del formulario de traslado mediaba un consentimiento informado, el que en el caso aquí analizado se echó de menos. Ello aunado a que ninguna confesión podría desprenderse de la versión dada por el accionante, pues se insiste, ni siquiera le explicaron las ventajas y desventajas de cada régimen.

Así las cosas, acogiendo los postulados sentados por nuestro órgano de cierre, se **CONFIRMARÁ** la decisión en este punto.

Ha de agregarse que ninguna variación genera la **MOVILIDAD** entre diferentes administradoras del RAIS que se presentó en el caso del señor PRIETO DIAGO, quien en 2006 se vinculó a ING hoy Protección S.A., y posteriormente efectuó movilidad a Horizonte hoy Porvenir S.A. y Skandia S.A. conforme se aprecia en el reporte del SIAFP (fl. 44 del archivo 14 del expediente digital), siendo Skandia S.A. el fondo donde actualmente permanece desde el último cambio efectuado en el año 2016. Lo anterior por cuanto, de un lado, importa es examinar lo acontecido al momento de cambiar de régimen, y de otro lado, cuando hay movilidad entre fondos privados, la asesoría NO suele referirse a las características del sistema de prima media, mucho menos a las implicaciones del cambio de sistema pensional, dado que son otras circunstancias las que se resaltan; no es lo mismo promover el cambio de una administradora a otra, a promover un cambio de régimen pensional, pues en el primer caso, por regla general, sólo se publicita la rentabilidad de uno u otro fondo.

En todo caso, si las AFP incumplieron su deber de información y por consiguiente debe declararse la ineficacia de la afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad, esa determinación implica privar de todo efecto práctico al traslado, por lo que mal haría esta Magistratura en siquiera pensar o asimilar una MOVILIDAD entre administradoras del RAIS, a una convalidación, por definirlo de alguna manera, de un acto jurídico que nunca existió.

Fue precisamente este el raciocinio de la Sala de Casación Laboral en sentencia de radicación SL4705-2021, cuando recalcó que:

En consonancia con lo antes señalado, debe resaltar la Corte que, desde la sentencia CSJ SL, 9 sep. 2008, rad. 31989, se ha sostenido que, una vez acreditada la ineficacia del traslado al régimen de ahorro individual, **el acto jurídico no se torna en eficaz por los cambios que los afiliados hagan entre administradoras privadas** lo que ha sido reiterado entre otras en las providencias CSJ SL2877-2020, CSJ SL1942-2021 y CSJ SL1949-2021

El anterior criterio es el que se encuentra vigente en la jurisprudencia de la Sala; motivo por el cual se recoge cualquier otro que le sea contrario y, frente a la cual se advierte que, como la declaratoria de ineficacia del traslado tiene como sustento el incumplimiento del deber de información en el traslado inicial, **al estar afectado el acto jurídico primigenio, los negocios jurídicos subyacentes adolecen de igual afectación**, entre ellos los traslados que se efectúen a los diversos fondos privados, ello en tanto que, el efecto de la declaratoria de ineficacia es volver al statu quo, lo que implica retrotraer la situación al estado en que se hallaría si el cambio de sistema pensional no hubiera existido jamás (CSJ 4025-2021, CSJ SL4062-2021, CSJ SL 4064-2021, entre muchas otras).

Luego entonces, para la Sala es claro que, en el presente asunto ni de la afiliación inicial, como tampoco de los traslados posteriores entre los diferentes fondos privados se evidencia que se hubiese recibido una información integral, completa y oportuna que brindara una ilustración respecto de las características, condiciones del mercado, ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes pensionales, así como de las contingencias financieras que tal decisión supondría en su derecho o como se dijo en la sentencia CSJ SL 6 oct.2021, rad.83576 « no prueba por sí mismo y mucho menos genera una especie de presunción relativa a que la voluntad reflexiva de la persona afiliada al materializar su acto de traslado de régimen pensional y de los posteriores tránsitos entre administradoras estaban nutridos con la debida ilustración en los términos explicados, ni así lo ha previsto el legislador».

Por lo tanto, la Sala insiste y reitera que **el solo hecho de que el afiliado se traslade en varias oportunidades dentro del RAIS, no puede convalidar, ni suplir el incumplimiento del deber de información por parte de la AFP al momento del traslado inicial** y los traslados posteriores, así como tampoco resulta ser evidencia de que el afiliado fue informado debidamente en los términos exigidos por la ley y la jurisprudencia y, menos aún puede considerarse que dicha circunstancia modera las consecuencias que ello supone en la eficacia del acto jurídico celebrado; todo esto bajo el contexto de que en el proceso quede por establecido que efectivamente el demandante no fue debidamente informado. (Resaltos de la Sala)

De otro lado, ha de precisarse que la aludida ineficacia no sólo implica el retorno de los dineros que se encuentren en la cuenta de ahorro individual del demandante, dígase aportes obligatorios, rendimientos, entre otros, sino que además acarrea a las administradoras del RAIS accionadas, a trasladar a Colpensiones E.I.C.E todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación, en los términos referidos por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de radicación 31.989, providencia donde la Sala de Casación Laboral adujo que la administradora debía asumir con cargo a

su propio patrimonio, los deterioros sufridos por el bien administrado, incluyendo los gastos de administración en que hubiere incurrido, concepto que abarca los costos de administración, primas de seguros de invalidez y sobrevivientes, además del porcentaje destinado al Fondo de Garantía de la Pensión Mínima de acuerdo a lo previsto en el art. 20 de la Ley 100 de 1993, punto en el que se **CONFIRMARÁ** la decisión adoptada por la a quo.

Y es que cuando se presenta MOVILIDAD, es decir, la persona se traslada entre distintas administradoras del RAIS, se considera necesario señalar que tal obligación respecto de los valores a retornar NO debe recaer exclusivamente en cabeza de la última entidad afiliadora en que estuvo, como en este caso lo es Skandia S.A., ni mucho menos se circunscribe al tiempo en que la persona estuvo en ese último fondo, de ahí que el retorno de los gastos de administración se extienda respecto de la época en que permaneció en Porvenir S.A., y Protección S.A.

Y es que la Sala de Casación Laboral, de cara a los efectos de la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional, ha sido pacífica en que ello trae como consecuencia para el fondo de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad, la devolución con cargo a sus propios recursos de los gastos de administración, razonamiento plasmado, entre otras, en la sentencia de radicación 85325 noviembre de 2020, cuando señaló que:

“(…) genera, como consecuencia, la de retrotraer la situación al estado en que se encontraba como si el acto nunca hubiera existido, es decir, se debe hacer la ficción de que el traslado nunca ocurrió, lo que conlleva, por parte de las administradoras privadas, a trasladar a COLPENSIONES, el capital ahorrado junto con los rendimientos financieros, con los gastos de administración y comisiones con cargo a sus utilidades (al efecto, pueden consultarse, entre otras, las sentencias de casación CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019 y CSJSL1688-2019)”

Y nuevamente en las sentencias de radicación 77.804 y 68.087 (M.P. Gerardo Botero Zuluaga) ambas de 2020, rememoró la CSJ SL, 8 sep. 2008, rad. 31989, en la que se dijo:

“Como la nulidad fue conducta indebida de la administradora ésta debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, ya por pago de mesadas pensionales en el sistema de ahorro individual, ora por los gastos de administración en que hubiere incurrido, los cuales serán asumidos por la Administradora a cargo de su propio patrimonio, siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del C.C.

Tal pensamiento también fue reiterado en la sentencia 78.667 (M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo), cuando adujo que:

De modo que, a juicio de la Corte, si bien no se pueden desconocer las reglas para las *restituciones mutuas* contempladas en el artículo 1746 del Código Civil, lo trascendente en la declaratoria de ineficacia de un acto jurídico es el restablecimiento de la legalidad que impone la eliminación de los efectos del acto configurado contrario a derecho y permitir,

cuando las circunstancias así lo posibiliten, retrotraer las cosas al estado en que estaban como si el negocio no se hubiere celebrado.

En el *sub lite*, la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho la demandante en el régimen de prima media con prestación definida. Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional

(...) De modo que, en este caso, la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional deben asumirla todas las entidades del régimen de ahorro individual a las que estuvo vinculado la actora, sin importar si tuvieron o no injerencia, o si participaron o no en el cambio de régimen pensional. Y aún en el evento de que Porvenir S.A. y Colfondos S.A. se consideren terceros, le asiste razón al actor en cuanto afirma en su oposición que, en dicha situación, es aplicable el artículo 1748 del Código Civil. En consecuencia, las AFP deben reintegrar los valores que recibieron a título de cuotas de administración y comisiones.

(...)Así, es claro que no le asiste razón al recurrente cuando refiere que «*las sumas depositadas en el fondo de garantía mínima no están en su poder*», debido a que el recaudo y manejo de las sumas destinadas al fondo de garantía mínima en el RAIS, en la actualidad, está a cargo de las administradoras de pensiones.

Y es que, no puede verse afectada la sostenibilidad financiera del régimen de prima media con prestación definida, debiendo garantizarse que COLPENSIONES E.I.C.E. reciba una suma equivalente a la que hubiese generado con rendimientos financieros, en caso de que el demandante jamás se hubiese trasladado, y es claro que de acuerdo con la forma como se distribuyen las cotizaciones en el RAIS, parte de ellas se imputó a gastos de administración, compañías aseguradoras y el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, sumas que como se dijo no puede ser inferior al monto total del aporte legal correspondiente en caso de que el afiliado hubiere permanecido bajo la administración de COLPENSIONES E.I.C.E., máxime si la ineficacia conlleva devolver las cosas a su estado original.

Empero, ello NO quiere decir que los rendimientos causados estén llamados a engrosar las arcas de la administradora del RAIS, pues si bien corresponden a unas utilidades acumuladas por años, generadas por las diferentes inversiones realizadas por los fondos privados en cumplimiento de la eficiente gestión que les impuso la ley, lo cierto es que dichos rendimientos son uno de los ítems que conforman la cuenta de ahorro individual, que como su nombre lo dice, pertenece al afiliado y cuando este se traslada de régimen, los dineros depositados allí necesariamente pasaran al fondo común administrado por prima media.

Tal razonamiento también encuentra soporte en lo normado por el literal d) del art. 60 de la Ley 100 de 1993, según el cual el conjunto de las cuentas individuales de ahorro pensional constituye un patrimonio autónomo propiedad de los afiliados, denominado fondo de pensiones, el cual es independiente del patrimonio de la entidad administradora.

De otro lado, respecto a la indexación de los tres ítems que componen los costos de administración, esta Magistratura considera procedente **MODIFICAR** el fallo, toda vez que tal dinero (costos de administración, primas de seguros de invalidez y sobrevivientes, además del porcentaje destinado al Fondo de Garantía de la Pensión Mínima), debe ser entregado a Colpensiones debidamente indexado por parte de Skandia S.A., Protección S.A. y Porvenir S.A. respecto del tiempo de permanencia en cada fondo, teniendo en cuenta como índice inicial el IPC certificado por el DANE a la fecha de pago de cada aporte y como índice final el vigente a la fecha de devolución aquí ordenada, aplicando la siguiente fórmula: $\text{Indexación} = \frac{\text{índice final}}{\text{índice inicial}} \times \text{capital} - \text{capital}$. Ello por cuanto una vez entre tal dinero al patrimonio de Colpensiones, el mismo se habrá visto envilecido por el paso del tiempo.

Ya la Sala de Casación Laboral se ha pronunciado sobre estos efectos, cuando indica que la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional trae como consecuencia para el fondo de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad, la devolución con cargo a sus propios recursos de los gastos de administración debidamente indexados, posición que se puede consultar en las providencias SL4811-2020, SL3207-2020, SL1688-2019, SL3202-2021, SL3706, SL3707, SL3708, SL3710 y SL3349-2021.

También resulta necesario señalar que, conforme múltiples pronunciamientos de la Sala de Casación Laboral, consúltense las sentencias de radicación SL4803-2021 y SL3710-2021¹, al momento de cumplirse la orden impartida, Skandia S.A., Protección S.A. y Porvenir S.A. deberán discriminar los conceptos entregados a Colpensiones E.I.C.E, detallando en forma pormenorizada a que corresponden cada uno de los valores entregados, punto en el que se **CONFIRMARÁ** el fallo proferido por la a quo.

En consecuencia, la decisión adoptada en primera instancia será **CONFIRMADA** por encontrarla ajustada a los antecedentes normativos y jurisprudenciales que se han expedido en torno al tema, **modificándola** en los aspectos antes aludidos.

Se condenará en costas en esta instancia a PORVENIR S.A., SKANDIA S.A. y COLPENSIONES E.I.C.E., a favor del demandante por no haber tenido éxito en la apelación. Se fijarán como agencias en derecho la suma de \$1.160.000 para cada entidad.

5 DECISIÓN DEL TRIBUNAL

¹ Concretamente dispusieron que: *Al momento de cumplirse esta orden, los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.*

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **DECIDE**

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 8 de agosto de 2023 por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por el señor **ENRIQUE PRIETO DIAGO** identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 79.300.992, en contra de **COLPENSIONES E.I.C.E., PROTECCIÓN S.A., PORVENIR S.A. y SKANDIA S.A.**


SEGUNDO: MODIFICAR el numeral segundo de la providencia, bajo el entendido que las AFP accionadas trasladarán a COLPENSIONES E.I.C.E, los tres ítems que componen los gastos de administración (costos de administración, primas de seguros de invalidez y sobrevivientes, además del porcentaje destinado al Fondo de Garantía de la Pensión Mínima), debidamente **INDEXADOS** al momento del pago.


TERCERO: Costas en esta instancia a cargo de PORVENIR S.A., SKANDIA S.A. y COLPENSIONES E.I.C.E.. Se fija como agencias en derecho la suma de \$1.160.000 para cada entidad y a favor del demandante.

Lo anterior se notificará por **EDICTO** que se fijará por la Secretaría por el término de un día.

Los Magistrados
(Firmas escaneadas)


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA


MARIA NANCY GARCIA GARCIA


MARTHA TERESA FLOREZ SAMUDIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL



SECRETARÍA

EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Proceso:	ORDINARIO LABORAL- apelación.
Demandante:	ENRIQUE PRIETO DIAGO.
Demandado:	COLPENSIONES E.I.C.E, y otros.
Llamada en garantía:	MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.
Radicado No.:	05001-31-05-018-2020-00224-01.
Tema:	ineficacia traslado
Decisión:	CONFIRMA Y MODIFICA SENTENCIA.
Fecha de la sentencia:	10/11/2023.

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 14/11/2023 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario